

Nuestro segundo principal problema de desarrollo

Jorge A. Restrepo

La violencia juvenil acaba con miles de vidas al año en Colombia. Y daña decenas de miles de vidas más.

Después de la pobreza, la violencia juvenil es, sin lugar a dudas, el problema que más afecta la calidad de vida de los jóvenes en el país: además de las pérdidas humanas a causa de la violencia, impone inmensos costos emocionales a los sobrevivientes, las familias y las comunidades. Los jóvenes que viven en entornos violentos toman decisiones más riesgosas, decisiones pensando más en el corto plazo que a largo plazo y están menos dispuestos a invertir en su bienestar, en el de sus familias y las comunidades: la violencia distrae del desarrollo social y productivo. La presencia de violencia deteriora la calidad de vida, genera miedo, fragmenta las comunidades, reduce las capacidades de producir, hace más costosa la vida cotidiana y hace menos posible competir bien, conduciendo al atraso social y económico. Los jóvenes que pasan de la agresión a la violencia —el daño intencional al otro— encontrarán más difícil dirigir su vida hacia el bienestar propio, de sus familias y el de sus comunidades.

En Colombia, la violencia juvenil es alta y prevalente en entornos urbanos —pese a grandes diferencias de intensidad entre ciudades y a la gran heterogeneidad aparente de sus manifestaciones.

Aún peor es que la relación con la violencia de los jóvenes no es de una sola vía: los jóvenes no sólo son víctimas directas, siendo el principal grupo demográfico en Colombia en riesgo de sufrirla, sino que también son los principales perpetradores de la violencia. En tanto menores de edad, muchos de estos perpetradores son también víctimas de quienes los usan —y hasta reclutan— para ejercer la violencia.

Pese a que en Colombia hay estudios que permiten verificar la mayor parte de las anteriores afirmaciones, es poco lo que se conoce en detalle sobre la violencia juvenil en Colombia.

Subsisten múltiples preguntas: no se conoce, por ejemplo, si existen diferencias sustanciales de la violencia juvenil en las diferentes grandes ciudades del país, menos se sabe el tamaño preciso del involucramiento de los jóvenes en la violencia. Tampoco se conoce cómo reducirla: esto es, la sociedad colombiana no sabe qué intervenciones son más efectivas para reducir la violencia juvenil, y cómo aplicar programas y proyectos específicos que sirvan para lograr reducciones de aquellas formas de violencia con mayor nivel de prevalencia en las ciudades. Tampoco se conoce si la violencia juvenil es en efecto un fenómeno que se pueda diferenciar –y qué tanto se diferencia– de las formas de violencia en las que se ven involucrados como víctimas o victimarios los adultos. Menos aún se sabe si las causas que explican la violencia de la que hacen parte o la que sufren los jóvenes en Colombia son una o muchas y si son diferentes de otras causas de problemas en nuestra sociedad. Tampoco se conoce cuáles son las estrategias que se han puesto en marcha desde las instituciones o desde las comunidades de base para afrontar la violencia. Ni se sabe cuáles funcionan, cuáles son menos costosas, a qué formas de violencia apuntan –por utilizar un término violento– y cuáles son más efectivas para reducir cada tipo de violencia.

Este gran vacío de conocimiento ha llevado a que las políticas, programas y proyectos, se desarrollen en muchos casos con base en prejuicios más que en respuestas concretas y verificables. Las acciones de la sociedad civil, muchas veces bien intencionadas, cuando dan en el clavo y logran reducir la agresión y la violencia y librar a los jóvenes de una seria desviación en el curso de sus vidas, lo hacen por el conocimiento de las comunidades y de cómo construir una vida feliz y productiva que tienen las familias y los líderes de estas comunidades.

No es que haya completa indiferencia frente a la violencia. Por el contrario, y este es un primer hallazgo, tal vez el más importante y esperanzador de esta investigación, la sociedad colombiana sí hace mucho –y mucho de ello funciona– para reducir la violencia juvenil. El trabajo con grupos positivos de jóvenes, desde temprana edad, generando confianza y respuestas constructivas a las problemáticas cotidianas de los jóvenes aparecen en la investigación como respuestas efectivas para prevenir. La construcción de relaciones de autoridad basadas en la confianza y la autoridad efectiva también son respuestas de prevención que los mismos entrevistados revelan como efectivas.

Sin embargo, tales intervenciones públicas y privadas operan bajo el velo de la ignorancia: ni la violencia juvenil se ha caracterizado correctamente,

ni se conoce qué es lo que más sirve para reducirla de manera no ambigua.

Así, uno de los principales y más costosos problemas de la sociedad Colombiana en términos humanos, está poco estudiado y por tanto los esfuerzos para resolverlo siguen operando tras ese velo de ignorancia.

Dada la coyuntura de la terminación del conflicto y la transformación de la violencia, esta investigación tiene un carácter estratégico, pues busca generar conocimiento sobre la violencia juvenil cuando más se le necesita. Colombia está pasando la página del conflicto armado interno y cualquiera que sea el resultado —ojalá venturoso— de las negociaciones en curso con los grupos guerrilleros, el conflicto colombiano no será igual al de antaño. De hecho, ya se presenta un proceso dinámico y complejo de transformación de la violencia, en el que la sociedad adopta formas de agresión contra la persona propias del conflicto armado interno y los grupos organizados que ejercen la violencia absorben las técnicas que son propias del conflicto.

La militarización —la conflictivización— de la violencia del crimen organizado, por ejemplo, es sólo una expresión de esa nociva transformación de la violencia, que, por demás, se ha documentado en otros contextos, como el de Guatemala.¹

En este proceso de transformación de la violencia, los jóvenes que residen en las ciudades, son los más vulnerables de los grupos poblacionales, con una particular acendrada exposición de las mujeres jóvenes y niñas, a ser afectados por la violencia, en formas mucho más letales, persistentes y dañinas, relacionadas casi todas con el conflicto armado interno.

La presencia de armas y, de quienes saben usarlas para el ejercicio de la violencia encuentra en los jóvenes un factor ideal para una instrumentalización efectiva en función de objetivos criminales usualmente coordinados y controlados por organizaciones del crimen.

Y esta instrumentalización parece romper límites conceptuales. En el caso de Cali, por ejemplo, no sólo los grupos de crimen instrumentalizan a los jóvenes; los jóvenes también aprenden a usar el conflicto, el crimen y la violencia para resolver disputas e imponer intereses personales. Este terrible hallazgo cuestiona la visión exclusiva de los jóvenes como víctimas, a pesar de ser agresores.

La segmentación y el control del comportamiento de las comunidades, poblaciones y regiones, aparece como otro de los objetivos de los grupos de conflicto que terminan desbordándose hacia formas de violencia que sirven

a otros fines diferentes a los de imponer una visión de sociedad diferente a la del *status quo*, como en el conflicto armado. Ese conflicto de raíz en conflictividades de tipo rural, termina prestando a los entornos urbanos sus métodos e instrumentos.

1.1. Un proyecto estratégico para la construcción de paz

Ficonpaz y la Pastoral Social de Colombia, atendiendo este carácter estratégico, nos invitó a los autores de esta investigación a realizar una serie de estudios de carácter cualitativo que permitieran caracterizar mejor la violencia que afecta a los jóvenes en cinco ciudades grandes de Colombia, a estudiar las situaciones críticas que allí se presentan y a identificar y caracterizar la oferta de programas y proyectos que buscan prevenirla.

Si bien la investigación, que se desarrolló en el curso de un año, se basó en casi una centena de entrevistas y trabajo de campo, y buscó aplicar las técnicas de investigación participativas más juiciosas disponibles a nuestro alcance, no podemos dejar de afirmar que, como toda investigación cualitativa, tiene limitaciones propias de sus métodos: no podemos ofrecer respuestas causales precisas para identificar el origen de las diferentes formas de violencia, tampoco podemos generalizar de manera inequívoca los diagnósticos a todo el entorno de ciudad y menos podemos atribuir resultados de reducción y prevención de la violencia a una u otra intervención. Así, el lector debe atender nuestros hallazgos con la generosidad que debe otorgársele a una investigación comparada de terreno, de tipo participativo con un alcance que en caso alguno es generalizable, más allá de toda duda, momento y contexto.

Este libro está basado así en los resultados de la investigación sobre violencia juvenil en los entornos urbanos de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena e Ibagué, que CERAC realizó para FICONPAZ y Pastoral Social de la Iglesia Católica, con apoyo de Caritas Noruega.

En particular, se desarrollan tres preguntas de investigación a lo largo del documento: ¿cuáles son las principales dinámicas de la violencia juvenil en cada una de las ciudades de estudio? ¿qué factores de riesgo y de protección están asociados a este fenómeno? y ¿qué se está haciendo en materia de prevención de esta violencia y qué tan efectivos son dichos esfuerzos para mitigar la problemática en los casos de interés?

Además de esta breve introducción (capítulo 1), el documento se compone de ocho capítulos agrupados en dos partes: en la primera, se abordan los referentes teóricos y conceptuales de la investigación, mediante la elaboración de un estado del arte sobre la producción académica y de literatura

gris en torno a la problemática de la violencia que afecta a los jóvenes (capítulo 2).

En la segunda parte se presenta la situación actual de los cinco casos de estudio (desde finales de la década del 2000 hasta la fecha). Los capítulos 3 al 7 corresponden a cada una de las ciudades de estudio y contienen la misma estructura temática: primero, una caracterización de la ciudad en sus principales rasgos socioeconómicos, así como una contextualización histórica de sus condiciones de seguridad. Después se presentan los resultados y el análisis de las dinámicas de la violencia juvenil en el período de tiempo más reciente, en lo concerniente a la participación de los jóvenes en grupos organizados de violencia y las principales situaciones críticas de violencia contra este grupo poblacional. A continuación para cada ciudad se abordan los principales factores de riesgo y protección frente a la violencia juvenil, tanto desde la perspectiva del joven que está ante la disyuntiva de decidir hacer parte de un grupo violento o no, así como desde el análisis de las condiciones que hacen más proclive a un joven a ser víctima de un hecho violento. Posteriormente se caracteriza la infraestructura de prevención de la violencia juvenil durante los años de observación y se analiza su efectividad.

El capítulo 8 recoge las conclusiones generales de cada una de las ciudades de estudio y plantea recomendaciones de política pública para la prevención de la violencia juvenil.

1.2. El diagnóstico de la violencia juvenil en Colombia

En los capítulos que siguen se presentan los fundamentos y resultados de esta investigación. Una rápida interpretación de ellos permite demoler varios mitos. En primer lugar, está el hecho de que no toda la violencia en Colombia es de origen criminal, y menos aquella que afecta a los jóvenes. Los entornos violentos a los que ellos se someten están también asociados a estructuras familiares disfuncionales y modelos de autoridad inefectivos, así como a respuestas de grupos de jóvenes que no logran canalizar productivamente sus capacidades de interacción social. Las situaciones críticas múltiples a las que están sometidos los jóvenes van desde los asesinatos por parte de bandas y pandillas, hasta las detenciones arbitrarias y los tratos abusivos por parte de la Fuerza Pública, pasando por los casos de violencia sexual realizados por grupos criminales o agrupaciones remanentes del conflicto.

Si bien existe un uso generalizado de los jóvenes para fines violentos por parte de organizaciones que ejercen la violencia de manera masiva, la violencia juvenil no siempre responde a las lógicas del conflicto armado interno

ni a las del crimen organizado, presentándose una gran heterogeneidad a través de las diferentes ciudades e incluso al interior de las ciudades. Más aún, documentamos casos en los que los jóvenes se organizan para ejercer la violencia por razones de grupo, no necesariamente relacionadas con fines instrumentales o funcionales, sino simplemente de identidad y búsqueda de autonomía y diferenciación.

Esta heterogeneidad se complementa con una fluidez característica que permite que haya una rápida adopción de formas instrumentales de violencia que llevan a su uso profesional, a través de ciudades y al interior de grupos al interior de la ciudad. Estas transferencias fluidas de técnicas de agresión y violencia y su adopción por parte de grupos armados violentos, son mecanismos detrás de la transformación de la violencia ya referida arriba y que está presente en las cinco ciudades de estudio.

En términos de las condiciones de contexto que facilitan la violencia juvenil e impiden prevenirla, encontramos una prevalente falta de confianza de los jóvenes y grupos de jóvenes en las instituciones, con particular estigmatización por parte de los jóvenes de las autoridades de policía. La gran distancia entre jóvenes y autoridades estatales ha llevado a este fenómeno de “estigmatización mutua” en el cual la desconfianza se retroalimenta, se sostiene y extiende en el tiempo y el territorio. Esta barrera de confianza mutua es tan generalizada y tan fuerte que sin duda podemos afirmar que impide una respuesta sostenible por parte del Estado a los problemas de violencia juvenil, limitando la efectividad de las instituciones de seguridad y justicia.

Un segundo elemento de contexto notorio que vale la pena resaltar es aquel relacionado con la migración hacia el control territorial de las organizaciones que ejercen la violencia. Si bien en el marco del conflicto armado pocas veces se logró el control sostenido de los territorios, para fines de captura de rentas ilegales las organizaciones que usan la violencia sí han logrado ser exitosas en mantener el control territorial y poblacional –en algunos casos al interior de las ciudades. Este objetivo, elusivo para las organizaciones de conflicto, ha sido posible para las organizaciones criminales precisamente gracias al uso de las estrategias propias del conflicto armado en entornos urbanos con fines puramente criminales.

Un tercer hallazgo hace referencia a la gran dinámica que presenta el uso de la violencia por parte de estas organizaciones: es notorio al leerse el documento con cuidado, que en las ciudades colombianas bajo estudio, se ha presentado un fenómeno de especialización flexible criminal: múltiples organizaciones criminales han logrado diversificar el origen de las rentas, y utilizar de manera flexible la violencia de las armas y los grupos de jóvenes –sin distingo de género– para ejercer la violencia instrumental.

Los jóvenes son un “insumo” fundamental de este ejercicio criminal adoptando las formas de violencia propias del conflicto armado, diseminándose en otros territorios urbanos y adaptándolas de manera efectiva a la respuesta de las autoridades que buscan oponer resistencia a tal adopción.

La carencia de efectividad de las instituciones para dar respuesta eficaz a este fenómeno en transformación –no la ausencia de tales instituciones– es común en las cinco ciudades. En gran parte puede deberse a la falta de confianza ya mencionada, pero también se explica por la generalizada privatización de la oferta de seguridad: el panorama urbano en Colombia se caracteriza por una oferta privatizada de seguridad que ofrece vigilancia y presencia –tanto defensiva como ofensiva, que rompe con la provisión del bien público y segmenta los espacios urbanos. La ineffectividad se acendra con la falta de conexión, con la baja capacidad de respuesta y las grandes dificultades de acceso a los servicios de justicia para los jóvenes víctimas de la violencia y en necesidad de protección. Así, estos “clubes de seguridad privatizada”, se han interpuesto en la prestación de un servicio público de seguridad que proteja a los jóvenes de la violencia y de los grupos violentos que los buscan usar.

La carencia de un sistema de protección y atención a jóvenes víctimas de la violencia en las ciudades –hoy en día por fortuna existente para las víctimas del conflicto armado interno– completa la carencia de una respuesta institucional. Las víctimas jóvenes de la violencia son atendidas hoy por las familias, las comunidades y las instituciones de la sociedad civil, como la iglesia católica, que terminan cumpliendo una tarea que les demanda altísimos recursos y preparación, ejerciendo un papel subsidiario por solidaridad y caridad, supliendo al Estado en sus funciones. Tampoco hay un programa serio de rehabilitación y reintegración a la sociedad de los jóvenes agresores. Igual a la analogía de las víctimas, cabe acá la analogía de la ausencia de un programa permanente y bien diseñado y atendido de desarme y reintegración.

Este descuido de los jóvenes víctimas de la violencia por parte del Estado y parte de la sociedad, genera trampas de violencia de las cuales los jóvenes encuentran muy difícil salir cuando en ellas caen. La oferta de incentivos positivos para el mantenimiento de conductas no agresivas, de resolución pacífica de conflictos y ajenas al uso de la violencia para fines criminales, poco aparece dentro de las ofertas institucionales para prevenir y reducir la violencia en las ciudades estudiadas. Un hallazgo común a casi todas las ciudades es la presencia de grupos de pares positivos como una estrategia identificada por los mismos entrevistados como efectiva para la prevención y la reducción de la violencia. Por el contrario, sí se documentaron casos de estigmatización, descuido y negación de los problemas que profundizan

tales trampas de violencia, impidiéndole a los jóvenes la posibilidad de reintegrarse a la comunidad incluso después de ser perpetradores.

También es importante reseñar lo que las mismas comunidades y entrevistados no señalan como efectivo: en particular, las prácticas duras de represión de la violencia o el castigo de comportamientos dañinos hacia el otro no aparecen como una demanda, tan siquiera como una posible salida a esta problemática. Aquí la pregunta es si es cierta o no esta “evaluación” participativa que no señala a la seguridad coercitiva como una receta para afrontar estos problemas. Lo que sí es cierto es que la ciudadanía no ve en dicha receta una salida a la problemática de la violencia juvenil.

Finalmente, en materia de género la investigación es reveladora, pues indica que el uso de los jóvenes por parte de los grupos violentos no es discriminatorio: se usa a mujeres y hombres por igual, sí se discrimina positivamente para afectar con la violencia sexual a las mujeres, más que a los hombres. Así, ser mujer joven o niña es menos un factor de protección de lo que se esperaría. La presencia de mujeres en roles “novedosos” de organización y control de la violencia al interior de las organizaciones criminales, es otro resultado preocupante de esta investigación.

Este estudio se entrega a la sociedad -gracias a la Iglesia Católica- para su debate y análisis. Debemos agradecer en particular el apoyo incondicional de Monseñor Héctor Fabio Henao, director del secretariado Nacional de Pastoral Social y al equipo de Ficonpaz por el apoyo en la elaboración de este libro. Dos mujeres fueron claves para lograr que este estudio se llevara a cabo y este libro fuera concluido: Rosa Inés Floriano, animadora área de Desarrollo Institucional y Jenniffer Vargas Reina Coordinadora de Proyectos, demandaron que la calidad y pertinencia de los contenidos estuvieran a la altura de las difíciles preguntas que decidimos afrontar.